

Santiago, veinte de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos tercero y cuarto, que se eliminan.

Y se tiene además presente:

1° Que, según aparece del mérito de los antecedentes, en los autos Rit 261-2021, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, con fecha 1 de abril de 2024 se celebró la audiencia de comunicación de la sentencia que condenó al acusado Cristian Apablaza Cerda a la pena única de once años de presidio mayor en su grado medio, en calidad de autor de los delitos reiterados de abuso sexual y violación, perpetrados en contra de persona mayor de 14 años. Contra esa determinación, la defensa dedujo recurso de nulidad, el que fue presentado a través de la Oficina Judicial Virtual, el día 12 de abril siguiente, recurso que fue declarado inadmisibile, por estimarse extemporáneo, por resolución dictada en igual fecha. Posteriormente, la defensa dedujo recurso de reposición en contra esta última, alegando un entorpecimiento, el que hizo consistir en que el último día del plazo para recurrir de nulidad, el Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal (DIGDP), que se encuentra interconectado con el sistema del Poder Judicial, presentó intermitencias o fallas, que impidió que el recurso presentado oportunamente fuera cargado al sistema. Al percatarse de ello, a primera hora de la mañana siguiente, decidió presentarlo nuevamente, a través de la Oficina Judicial Virtual.

Para acreditar el entorpecimiento alegado, la defensa acompañó copia de un correo electrónico suscrito por el Jefe del Departamento de Informática y Estadísticas de la Defensoría Penal Pública, que da cuenta que el SIGDP estuvo



fuera de servicio, el jueves 11 de abril entre las 18:00 y las 19:00 horas, y el día 12 de abril entre las 03:57 y las 08:57 horas.

2° Que, para resolver la controversia planteada, resulta preciso recordar que el Libro Primero del Código Procesal Penal, denominado “Disposiciones Generales”, y más precisamente en el artículo 17 del Código Procesal Penal, contenido en el Título II de ese Libro, previene: *“Nuevo plazo. El que, por un hecho que no le fuere imputable, por defecto en la notificación, por fuerza mayor o por caso fortuito, se hubiere visto impedido de ejercer un derecho o desarrollar una actividad dentro del plazo establecido por la ley, podrá solicitar al tribunal un nuevo plazo, que le podrá ser otorgado por el mismo período. Dicha solicitud deberá formularse dentro de los cinco días siguientes a aquél en que hubiere cesado el impedimento”.*

Por su parte, el artículo 2 letra d) de la Ley N° 20.886, dispone que *“Principios. La tramitación de las causas regidas por la presente ley se sujetará a los siguientes principios generales: d) Principio de buena fe. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso conforme al sistema informático de tramitación deberán actuar de buena fe. El juez, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contraria a la buena fe.”*

3° Que si bien resulta efectivo que el recurso de nulidad declarado extemporáneo fue presentado al día undécimo de haberse comunicado la sentencia, y por tanto fuera de plazo legal, resulta inconcuso que la defensa oportunamente alegó y acreditó que el sistema informático diseñado y destinado por la Defensoría



Penal Pública para conducir las presentaciones al órgano jurisdiccional, estuvo fuera de servicio por al menos una hora el último día del plazo, defectos de funcionamiento que se extendieron hasta la mañana del día siguiente, según se desprende de la correo electrónico acompañado, hecho que constituyen un principio de prueba que otorga plausibilidad al entorpecimiento alegado.

4°. Que, en consecuencia, habiéndose configurado el entorpecimiento alegado por el recurrente, por un hecho que no imputable a la defensa, como fue la falta de funcionamiento del sistema informático antes referidos, concurre lo supuesto previstos en el artículo 17 del Código Procesal Penal antes transcrito, de manera que correspondía que el tribunal otorgara un nuevo plazo para que el amparado pudiera ejercer su derecho a recurrir, lo que no hizo, acudiendo a preceptos contenidas a otros cuerpos normativos no atinentes a la controversia, decidiendo declarar inadmisibile el arbitrio de nulidad y con ello, incurriendo en una ilegalidad que autoriza a acoger el recurso de amparo deducido, adoptando las medidas conducentes para restablecer su derecho a la libertad personal, el que ha sido amenazado, al haberse descartado *in limine* y con las infracciones procesales constatadas, el recurso de nulidad deducido oportunamente, en contra de la sentencia que lo condena a una pena privativa de libertad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 7 y 21 de la Carta Fundamental, **se revoca** la sentencia apelada de veintiséis de abril pasado, pronunciada en la causa Rol N° 107-24 de la Corte de Apelaciones de Arica y, en su lugar, se decide que **se acoge** el recurso de amparo deducido en favor de Cristian Apablaza Cerda, por lo que se deja sin efecto la resolución de 17 de abril pasado, dictada en la causa Rit 261-23 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal



de Arica, debiendo el referido tribunal declarar admisible el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado, en contra de la sentencia dictada el 1 de abril de 2023, y dejar sin efecto todas las resoluciones y actuaciones dictadas con posterioridad al 12 de abril pasado, que se contrapongan a lo resuelto.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sra. Letelier y Sr. Matus quienes fueron del parecer de confirmar la resolución apelada en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Rol N° 15.983-2024



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., Jean Pierre Matus A. y Abogada Integrante Pía Verena Tavolari G. Santiago, veinte de mayo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veinte de mayo de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

